

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/331669841>

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N° 30364, comentada

Book · May 2016

CITATIONS

0

READS

1,330

1 author:



Beatriz Ramírez Huaroto

Pontifical Catholic University of Peru

23 PUBLICATIONS 9 CITATIONS

SEE PROFILE



LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - LEY N° 30364

COMENTADA

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364
COMENTADA

© Movimiento Manuela Ramos
Lima, mayo de 2016.

PROGRAMA PODER, DEMOCRACIA Y POLÍTICAS DEL MOVIMIENTO MANUELA RAMOS

Contenidos

Beatriz Ramírez Huaroto

Asistencia

Kelly Chunga Prieto

Coordinación

Lisbeth Guillén Chávez – Programa Poder, Democracia y Políticas del Movimiento Manuela Ramos

Diseño

Enrique Limaymanta Sulca

Dibujos

Carlos Dávila

Impresión

Servicios Gráficos JMD. Av. José Gálvez 1549, Lince.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-08260

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el marco del proyecto "Incidencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" que ejecutan Alianza por la Solidaridad y el Movimiento Manuela Ramos; y, del Proyecto VOICE que ejecuta CUSO Internacional. La inclusión de sus logotipos no implica que aprueben o respalden las opiniones expresadas en este material.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	05
TÍTULO I	
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	08
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES	09
CAPÍTULO II: DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	16
CAPÍTULO III: DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEL GRUPO FAMILIAR	20
TÍTULO II	
PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	26
CAPÍTULO I: PROCESO ESPECIAL	27
CAPÍTULO II: MEDIDAS DE PROTECCIÓN	33
TÍTULO III	
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS Y REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS	37
CAPÍTULO I: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS	38
CAPÍTULO II: REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS	41
TÍTULO IV	
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	44
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES	60
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS	61
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS	63
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS	69

PRESENTACIÓN

Luego de 22 años de vigencia de la ley 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, el 24 de noviembre de 2015 entró en vigencia la nueva **ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-Ley N° 30364** cuyo texto presentamos en esta publicación con comentarios para su mejor comprensión, aplicación en los servicios de la ruta de atención de la violencia y exigibilidad de su cumplimiento por las mujeres y sus organizaciones.

La nueva Ley N° 30364, tiene por objeto (artículo 1), prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar. Para este fin establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como de reparación del daño causado; y dispone también la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar, una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. En la ley se precisa claramente dos sujetos de protección, las mujeres a lo largo de su ciclo de vida y las/os integrantes del grupo familiar.

La nueva ley que se enmarca en los mandatos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida también como Convención de Belém Do Pará, aprobada y ratificada por el Perú el año de 1996, norma internacional de obligatorio cumplimiento, adopta entre otros, el principio de debida diligencia por el que el Estado debe adoptar sin demora todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sancionando a las autoridades que incumplan este principio. Crea el Sistema Nacional de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel bajo la conducción y rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dispone también la creación de instancias subnacionales (regionales, provinciales y distritales) de concertación para elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar así como para dar seguimiento al cumplimiento de la presente ley.

El Sistema nacional contra la violencia creado por la ley operará a través de instrumentos y mecanismos como el Protocolo Base de actuación conjunta, el Registro único de víctimas y agresores, el Observatorio nacional de la violencia y el Centro de altos estudios. Entre las responsabilidades el Ministerio de Educación debe supervisar que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios, y se fomente la igualdad entre mujeres y hombres. El Ministerio de Educación debe promover en la Policía Nacional del Perú, la creación de la especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar así como garantizar en los servicios de comisarías y áreas competentes, la permanencia de personal especializado y sensibilizado para la atención en materia de violencia. El Ministerio del Interior debe incorporar en los lineamientos educativos de las Fuerzas Armadas contenidos específicos sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Los medios de comunicación también deben difundir información relativa a la violencia contra la mujer, garantizando objetividad, defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres. Deben asimismo permitir el uso de la franja educativa, dedicando el 10% de su programación al desarrollo de contenidos para sensibilización, prevención, atención, protección y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Como puede concluirse, esta ley señala muy buenas medidas para garantizar la vigencia del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, queda mucho trabajo para su implementación y cumplimiento lo que demanda de mejoras en la coordinación interinstitucional de los servicios de la ruta de atención, de asignación presupuestal acorde con la necesidad de un abordaje multidisciplinario e intercultural de la violencia machista definida como un problema de salud pública que afecta la salud y la vida de las mujeres.

Lima, mayo de 2016.



LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - LEY N° 30364¹ COMENTADA

¹ Publicada en el Diario Oficial el Peruano, el 23 de noviembre de 2015.



TÍTULO I

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS **PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y** **ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA** **CONTRA LAS MUJERES Y LOS** **INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

COMENTARIO

La **Ley N° 30364** por una parte, regula la violencia que se produce contra las mujeres en razón de la discriminación por sexo en cualquier espacio, conforme los estándares internacionales contenidos en la Observación General N° 19 del Comité que hace seguimiento al cumplimiento de la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (Comité CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Y, junto con ello, incluye la violencia en el marco de las relaciones familiares que no se dirige contra las mujeres, sino a otros/as integrantes de las familias, lo que era básicamente el alcance de la legislación previa (Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar).

La norma, que tiene vocación de integral, incluye disposiciones para el trámite de las denuncias por estos hechos, pero también contiene disposiciones estructurales para el Estado en su conjunto frente a esta problemática.

Artículo 2

Principios rectores

En la interpretación y aplicación de esta Ley, y en general, en toda medida que adopte el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios:

1. Principio de Igualdad y No Discriminación

Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbese toda forma de discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.

2. Principio del Interés superior del niño

En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño.

Esta norma, a diferencia de la legislación anterior, incluye una parte de principios rectores que deben ser tomados en cuenta en su aplicación para, por ejemplo, resolver problemas de interpretación que puedan presentarse.

El **principio de igualdad y no discriminación** es central en la temática de violencia pues, conforme lo ha señalado el Comité CEDAW, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación², y lo mismo puede decirse de la violencia contra personas en posiciones vulnerables en las relaciones familiares como las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Señalar que en la interpretación y aplicación de esta ley debe garantizarse este principio es reforzar la necesidad de no profundizar la desigualdad implícita en la violencia y evitar, por ejemplo, incurrir en discriminaciones concurrentes como la aplicación de estereotipos de género contra las mujeres o los hombres

El **principio del interés superior del niño** y la niña tiene como fin garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos para garantizar su desarrollo. La Observación general N° 14 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, precisa que la determinación del interés superior del niño debe comenzar con una evaluación de algunos elementos y el seguimiento de ciertas garantías.

Entre los elementos a considerar está la opinión del/a niño/a; su identidad lo que incluye su sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad; la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones; el entorno de cuidado, protección y seguridad; su situación de vulnerabilidad; y sus derechos a la salud y la educación. Cada elemento se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras en los distintos casos. El contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas, al igual que la importancia de cada elemento en la evaluación general³. Entre las garantías procesales para velar por la observancia del interés superior del niño tenemos el derecho a expresar su propia opinión; la celeridad en el tiempo; la representación legal de sus derechos; y la evaluación del impacto en sus derechos.

² COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 19, numeral 7.

³ COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. Recomendación General N° 14, numerales 52-84.

3. Principio de la Debida diligencia

El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio.

4. Principio de Intervención inmediata y oportuna

Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.

La **debida diligencia** puede definirse como la obligación de los Estados partes de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción [...]. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención⁴.

Recientemente, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, conocido como Comité CEDAW, ha emitido su Recomendación general N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia en la que recomienda a los Estados que “ejercen la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales” (numeral 53, inciso a).

Así también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los países a “garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación oportuna, completa e imparcial, así como la adecuada sanción de los responsables y la reparación de las víctimas”⁵.

El **principio de intervención inmediata y oportuna** es parte importante del acceso a la justicia en casos de violencia. Así, el Comité CEDAW recomienda a los Estados, como parte de la accesibilidad de los sistemas de justicia, que “protejan a las mujeres querellantes, testigos, demandadas y reclusas contra amenazas, hostigamiento y otras clases de daños durante y después de las actuaciones judiciales y proporcionen los presupuestos, recursos, orientaciones y vigilancia, así como los marcos legislativos necesarios para garantizar que las medidas de protección funcionen de manera efectiva”⁶. También recomienda que los Estados “adopten medidas para garantizar que las mujeres no se vean sometidas a demoras indebidas en sus solicitudes de protección y que todos los casos de discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal, incluida la violencia, sean tramitados de manera oportuna e imparcial”⁷.

⁴ COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. Recomendación General N° 14, numerales 85-99.

⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166.

⁶ CIDH. Acceso a la justicia para las víctimas de la violencia en las Américas, p. 123.

⁷ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 17, inciso g.

⁸ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 51, inciso j.

5. Principio de Sencillez y Oralidad

Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.

6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad

El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El **principio de sencillez y oralidad** señala que las actuaciones en el marco de la ley deben llevarse a cabo con las menores formalidades posibles y privilegiando un ambiente amigable para quien denuncia. El Comité CEDAW, en su Recomendación general N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, recomienda que los Estados tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos de la justicia penal; y tomen medidas para prevenir las represalias contra las mujeres que recurren al sistema de justicia (numeral 51, inciso d).

El **principio de razonabilidad y proporcionalidad** apunta a que en los casos concretos que sean conocidos por el sistema de justicia se evalúen adecuadamente las circunstancias para decretar las medidas correspondientes con la finalidad de garantizar, de la mejor forma, los derechos de quienes denuncian la violencia. El Comité CEDAW señala que los Estados deben asegurar que los "recursos sean adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Los recursos deben incluir, según corresponda, la restitución (reintegración); la indemnización (ya sea que se proporcione en forma de dinero, bienes o servicios); y la rehabilitación (atención médica y psicológica y otros servicios sociales)"⁹.



⁹ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 19, inciso b.

Artículo 3

Enfoques

Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran los siguientes enfoques:

1. Enfoque de género

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2. Enfoque de Integralidad

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.

El **enfoque de género** debe ser considerado al aplicar la ley, lo que incluye el procesamiento de las denuncias en su marco. De acuerdo al Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, el enfoque de género es “una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen esas asimetrías y desigualdades, y a formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales de género”¹⁰.

El **enfoque de integralidad** parte del reconocimiento de que la violencia hacia la mujer es multicausal y de que contribuyen a su existencia diversos factores que están presentes en el ámbito individual, familiar, comunitario, pero también social-estructural¹¹.

Señala la ONU que la adopción de un enfoque integral para comprender requiere, entre otras cosas, que: “a) los derechos se consideren universales, interdependientes e indivisibles; b) la violencia se inserte en un contexto inclusivo que abarque la violencia interpersonal y estructural; c) se tenga en cuenta la discriminación tanto individual como estructural, incluidas las desigualdades estructurales e institucionales; y d) se analicen las jerarquías sociales y/o económicas entre las mujeres y entre las mujeres y los hombres, es decir, tanto dentro del mismo género como entre los géneros”¹².

Este enfoque apunta a considerar la violencia como un proceso paralelo e interdependiente a otras formas de abuso que afectan cualitativamente el bienestar económico, social, cultural y político de las personas. Por ello, la privación de agua, alimentos y otros derechos humanos se identifican como causas estructurales de esta problemática y no hay lucha contra la violencia efectiva si no se atacan las desigualdades subyacentes¹³.

Además, la perspectiva integral parte de reconocer que en el fondo las desigualdades, entre ellas las de género, propician inicialmente el abuso, que “la violencia ocurre debido a que se fomentan otras formas de discriminación”. Por ello, “los esfuerzos encaminados a poner fin a todas las formas de violencia [...] deben considerar no solo la forma en que la vida de las personas se ve afectada por el impacto inmediato del abuso, sino también la manera en que las estructuras de discriminación y desigualdad perpetúan y exacerbaban la experiencia de la víctima”. Así por ejemplo, aunque todas las mujeres están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia en cualquier sociedad del mundo, no todas las mujeres son igualmente vulnerables. El enfoque integral “consiste en atacar la discriminación y marginación sistemáticas. Ya se basen en la raza, el origen étnico o nacional, la capacidad, la clase socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la cultura, la tradición u otras realidades, la discriminación suele intensificar la violencia”¹⁴.

¹⁰ Plan Nacional de Igualdad de Género, PLANIG 2012-2017, p. 40.

¹¹ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Instrumentos de gestión y funcionamiento de los hogares de refugio temporal para la atención a personas afectadas por violencia familiar, sexual y de género. Lineamientos para la atención y funcionamiento de los hogares de refugio temporal. 2015, p. 8 y MIMP. Lineamientos para las acciones preventivas promocionales de los Centros de Emergencia Mujer. 2012, p. 11.

¹² ONU. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (A/HRC/14/22) 2010, párr. 80.

¹³ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (A/HRC/14/22) 2010, párr. 83.

¹⁴ ONU. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (A/HRC/14/22) 2010, párr. 84-86.

3. Enfoque de Interculturalidad

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.

4. Enfoque de Derechos Humanos

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.

5. Enfoque de Interseccionalidad

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.

Aplicar el **enfoque de interculturalidad** implica valorizar e incorporar las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y a la población afroperuana. Parte del reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de igualdad de oportunidades y derechos¹⁵.

El **enfoque de derechos humanos** está basado desde el punto de vista normativo en las normas internacionales de derechos humanos y está orientado a la promoción y protección de los derechos humanos¹⁶. Su aplicación en el marco de la ley supone que se valore lo que está en juego en los casos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar son derechos humanos de las personas y, en esa medida, debe darse la máxima atención y el mejor tratamiento.

El **enfoque de interseccionalidad** se refiere a que se deben abordar las causas de la discriminación interseccional o compuesta que incluye "la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales. Estos factores interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la justicia"¹⁷.

Aplicar este enfoque implica entender que en la experiencia de quienes son afectadas/os por la violencia se cruzan múltiples identidades y eso sitúa múltiples situaciones de opresión o privilegio, en el marco de contextos históricos, sociales y políticos, además de la experiencia individual y única de vivir la conjunción de los diferentes tipos de identidad. La aplicación de la ley debe atender al impacto de esta convergencia de discriminaciones en el acceso a derechos para revertir sus efectos¹⁸.

¹⁵ MINISTERIO DE CULTURA. Política Nacional para la transversalización del enfoque intercultural, p. 6.

¹⁶ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, p. 30.

¹⁷ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 8.

¹⁸ MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. Directiva N° 004-2015-MIDIS, Lineamientos para la transversalización del enfoque de género en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, numeral 4.10.

6. Enfoque Generacional

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas.

Artículo 4 Ámbito de aplicación de la Ley

Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar.

Aplicar el **enfoque generacional** implica reconocer que las etapas generacionales por las que transitan todas las personas marcan diferencias en términos de capacidades físicas y mentales y que llevan a que las necesidades, aportes y responsabilidades de las personas varíen en cada etapa del ciclo de vida. Fomenta que se forjen relaciones democráticas, libres de toda forma de violencia, entre los distintos grupos de edad en los distintos espacios de convivencia y de relación social. En la aplicación de la ley debe apuntarse a que todas las personas, con independencia de su edad, tengan garantizado el respeto y ejercicio plenos de sus derechos, incluyendo el de una vida libre de violencia¹⁹.



Como se ha mencionado anteriormente, el alcance de aplicación de esta ley es mayor al de la legislación anterior, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. No solo cubre la violencia en las relaciones familiares, sino que regula la violencia que se produce contra las mujeres en razón de la discriminación por sexo en cualquier espacio, bien sea privado o público.

¹⁹ MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Plan Nacional para las personas adultas mayores 2013-2017, p. 19.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 5

Definición de violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se entiende por violencia contra las mujeres:

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.

COMENTARIO

La **definición de violencia contra las mujeres** retoma los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

El art.1 de la Convención señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género”, lo que en la ley se frasea como “por su condición de tales”. Lo central de la definición recogida en la ley, es que resalta que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación por sexo-género en la línea de lo señalado por el Comité CEDAW en su Recomendación General N° 19 (numeral 7): la violencia por ser mujer -que es discriminación directa- o que afecta a las mujeres en forma desproporcionada -que sería equivalente a una discriminación indirecta. Esto ha sido retomado por la jurisprudencia interamericana porque se ha establecido que “no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará”. Para ello debe demostrarse que los actos fueron “especialmente dirigidos contra las mujeres”, cómo se convirtieron en un mayor blanco de ataque “[por su] sexo”, como los actos de violencia “resultaron agravados por su condición de mujer” o cómo “afectaron a las mujeres de manera desproporcional”²⁰.

²⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 295-296.

Artículo 6

Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.

Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Artículo 7

Sujetos de protección de la Ley

Son sujetos de protección de la Ley:

- a.** Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor.
- b.** Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones

La definición considerada en este artículo se corresponde con la de la violencia contra las mujeres. La legislación previa entendía por violencia familiar “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual” que se produjera entre las personas comprendidas como familia (Texto único ordenado de la Ley N° 26260, artículo 2).

La primera diferencia es que en esta nueva ley no se menciona expresamente el maltrato sin lesión, aunque alude al sufrimiento físico, sexual o psicológico; la segunda diferencia es que se menciona que la violencia en las relaciones familiares se enmarca en relaciones de responsabilidad, confianza o poder, mientras que la legislación previa solo requería que se produzca entre las personas comprendidas como familia.

Sobre este último puede argumentarse que la violencia entre familiares requiere enmarcarse en relaciones de responsabilidad, confianza o poder para estar comprendida por la nueva ley, de forma que se trata de una violencia “calificada” como en el caso de la violencia contra las mujeres en que se menciona expresamente que es violencia basada en el sexo. No obstante, en el marco de los principios rectores que guían la interpretación y aplicación de la ley debería darse la interpretación más extensiva a la norma, sobre todo para la recepción y procesamiento de denuncias, considerando que la determinación de la violencia es objeto de un procedimiento judicial que la misma norma regula.

En función de las dos modalidades de violencia que regula, la ley tiene dos grupos de protección. Por un lado las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida (niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor) a quienes se protege contra todos los tipos de violencia por su condición de ser mujeres. Por otro lado, se protege a quienes tienen relaciones familiares con un alcance semejante al de la ley anterior.

En este último grupo se agrava el error de redacción de la legislación previa (Texto único ordenado de la Ley N° 26260, artículo 2) que incluía el parentesco colateral “hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, dejando de nombrar el parentesco por afinidad en línea recta hasta el segundo grado (relación suegra/o-nuera/o y de abuelo/a-nieto/a político/a) sobre los que usualmente hay efectos jurídicos. Asimismo, se agrava el error existente desde noviembre de 2008 en la legislación anterior: la modificación legal realizada en esa fecha que buscaba dar una protección análoga a la del parentesco por afinidad -que es el que se produce entre cada cónyuge con las/os parientes consanguíneos del otro/a- para las uniones de hecho mencionaba que se incluía como familia a “uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”, lo cual es una inconsistencia técnica por la

antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.



Artículo 8 Tipos de violencia

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

a) Violencia física

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

referencia indebida al parentesco por consanguinidad y la mención redundante de afinidad. En la ley vigente el error es más grave porque se mezclan los errores previos: no se menciona siquiera el parentesco colateral consanguíneo o por afinidad que sí estaba antes, no se menciona tampoco el parentesco por afinidad en línea recta, sino que se hace referencia a los “parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad” lo cual es una inconsistencia técnica que profundiza los errores previos.

En aplicación de los principios que guían la interpretación y aplicación de la ley debería darse una interpretación amplia al grupo familiar protegido: relaciones de cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, parientes consanguíneos en línea recta (ascendientes y descendientes), parientes consanguíneos en línea colateral hasta el cuarto grado (hasta primos/as), parientes afines por matrimonio o convivencia tanto en línea recta como colateral hasta el segundo grado (padre/madre política y cuñadas/os), quienes hayan procreado hijos/as en común independientemente de si conviven o no al momento de producirse la violencia, y quienes habitan en el mismo hogar, aunque se excluye a trabajadoras/es domésticas/os. En el sentido de considerar un concepto amplio de familia se pronuncia el Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará²¹.

La definición de **violencia física** “entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor o un arma para dañar o lesionar”²². Nuestra legislación incluye conductas no intencionales como la negligencia y el descuido, y no exige que se produzca un daño, sino que este sea posible. En atención a los principios que guían la aplicación de la ley, es acertado que se interprete de la forma más amplia.

²¹ MESECVI. Guía para la aplicación de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 2014. OEA/Ser.L/II.6.14, p. 23.

²² ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. “Poner fin a la violencia contra la mujer”. Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas. 2006, p. 43.

b) Violencia psicológica

Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

c) Violencia sexual

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

d) Violencia económica o patrimonial

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:

1. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;
4. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

La **violencia psicológica** implica controlar o aislar, así como humillar o avergonzar a una persona²³. Incluye "maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales"²⁴. Al igual que en la definición de violencia física, se precisa que puede producirse daño, pero no se exige que se concrete.

Tradicionalmente la **violencia sexual** comprende el contacto sexual abusivo, los actos sexuales no consentidos y la tentativa o consumación de actos sexuales con quien está enferma/o, incapacitada/o, bajo presión o bajo la influencia de alcohol u otras drogas²⁵. La jurisprudencia interamericana ha ampliado el concepto precisando que considera que "la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno"²⁶. La ley se alinea con esta concepción amplia de este tipo de violencia.

La **violencia económica o patrimonial** implica negar el acceso a los recursos básicos o el control sobre ellos²⁷. No es mencionada expresamente en la Convención de Belém do Pará, a diferencia de los tres tipos de violencia anteriores; sin embargo, "es actualmente considerada una forma de violencia a nivel internacional y está incluida en legislaciones nacionales"²⁸. La definición que contiene la ley proviene literalmente de la Ley 26.845 de Argentina²⁹.

²³ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. "Poner fin a la violencia contra la mujer". Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas. 2006, p. 43.

²⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Violencia contra la mujer. Un tema de salud prioritario. 1998, p. 7.

²⁵ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. "Poner fin a la violencia contra la mujer". Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas. 2006, p. 43.

²⁶ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, pár. 306.

²⁷ ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. "Poner fin a la violencia contra la mujer". Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas. 2006, p. 43.

²⁸ MESECVI. Guía para la aplicación de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 2014. OEA/Ser.L/II.6.14, p. 22.

²⁹ Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, de abril de 2009, artículo 5.4.

CAPÍTULO III

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 9

Derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.

Artículo 10

Derecho a la asistencia y la protección integrales

Las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos.

COMENTARIO

La ley sigue la línea de lo señalado en los artículos 3 y 6 de la Convención de Belém do Pará. El artículo 3 de este tratado destaca que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” y el artículo 6 reconoce el derecho “a ser libre de toda forma de discriminación” y “a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.

El **derecho a la información** comprende la obligación positiva del Estado de permitir a los/as ciudadanos/as acceder a la información que está en su poder. Incluye que “toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente”, y que “todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información”³⁰.

³⁰ CIDH. El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. 2011, p. 1.

Los derechos considerados en este artículo son:

a. Acceso a la información

Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares. Es deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia. En todas las instituciones del sistema de justicia y en la Policía Nacional del Perú, debe exhibirse en lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia y de los servicios de atención que brinda el Estado de manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de información a la víctima en su propia lengua. El Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de esta obligación.

El **acceso a la información** de las víctimas es un derecho emblemático en los casos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado “garantizar que las víctimas de violencia y sus familiares puedan obtener información completa y veraz, de manera pronta y digna, sobre el proceso judicial relacionado con los hechos denunciados”³¹, así como “implementar esfuerzos e iniciativas para difundir la información disponible al público general en un formato sensible a las necesidades de una diversidad de audiencias y poblaciones de distintos niveles económicos y educacionales y de diferentes culturas y lenguajes. La seguridad y la privacidad de las víctimas deben constituir una prioridad en este proceso de difusión”³².

Por su parte, el Comité CEDAW señala que es parte de la accesibilidad a los sistema de justicia el que se “desarrollen actividades de divulgación específicas y distribuyan, por ejemplo, mediante dependencias o mostradores dedicados a las mujeres información sobre los mecanismo judiciales, los procedimientos y los recursos disponibles, en diversos formatos, y también en los idiomas comunitarios, por ejemplo mediante dependencias específicas o mostradores para mujeres. Esas actividades información deben ser apropiadas para todos los grupos minoritarios y étnicos de la población y deben estar diseñados en estrecha cooperación con mujeres de esos grupos y, especialmente, organizaciones de mujeres y otras organizaciones pertinentes”³³. Asimismo, recomienda que se “difundan materiales en formatos múltiples para informar a las mujeres sobre sus derechos humanos y la disponibilidad de mecanismos para acceder a la justicia y les informen de sus posibilidades de conseguir apoyo, asistencia jurídica y servicios sociales para interactuar con los sistemas de justicia”³⁴.

³¹ CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. 2007, p. 126.

³² CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. 2007, p. 128.

³³ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 17 c.

³⁴ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 33 b.

b. Asistencia jurídica y defensa pública

El Estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de personal especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad.

La defensa de las víctimas de violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar, en aquellos lugares donde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no pueda brindar el servicio, lo presta las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en lo que corresponda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueven el involucramiento de los colegios de abogados en la materia.

c. Promoción, prevención y atención de salud

La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es gratuita en

Destaca el Comité CEDAW entre sus estándares de **acceso de las mujeres a la justicia** que “un elemento crucial para garantizar que los sistemas de justicia sean económicamente accesibles a las mujeres es el suministro de asistencia jurídica gratuita o de bajo costo, asesoramiento y representación en procesos judiciales y cuasi judiciales en todas las esferas del derecho”³⁵. En esa medida, la ley se alinea con las recomendaciones que este órgano del sistema de Naciones Unidas hace a los Estados y que incluye al menos:

a. que se institucionalicen sistemas de asistencia jurídica y defensa pública que sean accesibles, sostenibles y respondan a las necesidades de las mujeres; y aseguren que esos servicios se presten de manera oportuna, continua y efectiva en todas las etapas de los procedimientos judiciales o cuasi judiciales, incluidos los mecanismos de solución de controversias alternativos y los procesos de justicia restaurativa, y aseguren el acceso sin impedimentos de la asistencia jurídica y los proveedores de defensa pública a toda la información pertinente y otra información, incluidas las declaraciones de los testigos”;

b. que se asegure “que los proveedores de asistencia jurídica y defensa pública sean competentes, sensibles a las cuestiones de género, respetuosos de la confidencialidad y que tengan el tiempo suficiente para defender a sus clientes”;

c. que se “realicen programas de información y promoción de los conocimientos para las mujeres sobre la existencia de proveedores de asistencia jurídica y defensa pública y las condiciones para obtenerlas, utilizando de manera efectiva la tecnología de la información y las comunicaciones para facilitar esos programas”; y

d. que se “desarrollen asociaciones con proveedores no gubernamentales competentes de asistencia jurídica y/o asistentes jurídicos para ofrecer a las mujeres información y asistencia cuando actúan en procesos judiciales o cuasi judiciales y sistemas de justicia tradicional”³⁶.

El **acceso a la salud** es un derecho de toda persona a que su salud sea preservada sin discriminación por medidas sanitarias, de asistencia médica y sociales, entendida la salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social³⁷. En el ámbito de los casos de violencia surge una obligación reforzada. Debe asegurarse “el acceso a los centros de crisis, la asistencia financiera, los refugios, las líneas de emergencia y los servicios médicos, psicosociales y de orientación”³⁸. Es obligación de los

³⁵ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 36.

³⁶ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 37.

³⁷ CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual: la educación y la salud. 2011, p.31.

³⁸ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 16 b.

cualquier establecimiento de salud del Estado e incluye la atención médica; exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología y otros); hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o requerida para el restablecimiento de su salud.

El Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios de salud para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. Respecto de las atenciones médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio de Salud debe resguardar la adecuada obtención, conservación de la documentación de la prueba de los hechos de violencia. Esta obligación se extiende a todos los servicios públicos y privados que atienden víctimas de violencia, quienes, además, deben emitir los certificados correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

d. Atención social

El Estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los programas sociales, garantizando la confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa vigente.

Estados asegurar que los/as profesionales de salud, que cumplen una función importante en los casos de violencia contra las mujeres y en cuestiones de familia, actúen con perspectiva de género, eliminando estereotipos³⁹. Asimismo, se requiere contar con protocolos para las/os “proveedores de servicios de salud relativos a la reunión y conservación de las pruebas forenses en casos de violencia contra la mujer”⁴⁰.



Es una obligación de los Estados contar con servicios integrales para las víctimas de violencia, incluyendo servicios de carácter social. La Comisión Interamericana recomienda “asignar un mayor número de recursos estatales a las entidades responsables de prestar servicios de naturaleza legal, psicológica y social a mujeres víctimas de violencia”⁴¹. La ley menciona expresamente a los programas sociales pero enfatiza que la atención debe estar enmarcada en los criterios y reglas de la normatividad vigente, la que hoy se rige, por ejemplo, por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que gestiona una base de datos socioeconómica única que permite priorizar la atención de los programas sociales en los hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

³⁹ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 29 a y b.

⁴⁰ COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 33, numeral 51 k.

⁴¹ CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. 2007, p. 129.

Artículo 11

Derechos laborales

El trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se refiere la presente Ley tiene los siguientes derechos:

- a.** A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia.
- b.** Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo pertinente.
- c.** A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco días laborales en un período de treinta días calendario o más de quince días laborales en un período de ciento ochenta días calendario. Para tal efecto, se consideran documentos justificatorios la denuncia que presente ante la dependencia policial o ante el Ministerio Público.
- d.** A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones.

La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral.

La protección laboral para las víctimas de violencia tiene su referente en la legislación española. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señala que el reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que abandonen el mercado laboral a causa de la violencia y, para ello, se reconocen “derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo”⁴². Existe por eso regulación tanto para el trabajo por cuenta ajena, como por cuenta propia, y se reconoce, entre otros, el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica, el derecho a la suspensión de la relación laboral, a justificar ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la violencia de género y la nulidad del despido⁴³. En el Perú existe evidencia sobre los costos empresariales de la violencia contra las mujeres: se estima que “ocasiona una pérdida anual de más de 6,7 billones de dólares americanos, debido a 70 millones de días laborales perdidos” tanto por quienes agreden como por quienes son agredidas, y que esto “es equivalente a una pérdida de 3,7% del producto bruto interno (PBI)”⁴⁴. Estos datos evidencian que la problemática de la violencia afecta el entorno laboral por lo que se justifica que haya protección en razón de los efectos de esta trasgresión de derechos.

⁴² MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, p. 8.

⁴³ MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, pp. 8-10.

⁴⁴ UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES. Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú. Resumen ejecutivo. 2013. p. 13.

Artículo 12 Derechos en el campo de la educación

La persona víctima de la violencia a que se refiere la presente Ley tiene, entre otros, los siguientes derechos:

a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos.

b. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. Estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario.

c. A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del mismo.

Es obligación del Estado la formulación de medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo.

Este artículo tiene su correlato en la racionalidad del anterior pero en el ámbito educativo. Es importante el reconocimiento que la violencia tiene efectos también en los espacios de formación y, por ello, es necesario adoptar medidas para evitar que esto se materialice en un abandono de los estudios o en una afectación en el rendimiento.



TÍTULO II

PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPÍTULO I

PROCESO ESPECIAL

Artículo 13 **Norma aplicable**

Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan por las normas previstas en la presente Ley y, de manera supletoria, por el Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, y la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes.

Artículo 14 **Competencia de los juzgados de familia**

Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar.

COMENTARIO

Esta ley regula un nuevo esquema procesal para las denuncias seguidas por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que deroga el procedimiento preexistente regulado en el TUO de la Ley N° 26260.

Como en la legislación previa, con competentes los juzgados de familia aunque se ha variado sustantivamente el rol que tienen en la tramitación de los procesos.

Artículo 15 Denuncia

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos.

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad.

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado.

La nueva ley sigue en lo sustantivo la legislación precedente respecto de las características de la denuncia.

La legislación previa señalaba que las denuncias podían presentarse en forma verbal o escrita. La nueva ley añade que de presentarse una denuncia verbal se requiere solo una sucinta relación de los hechos con lo que se deja constancia.

La legislación anterior ya preveía que las denuncias pudieran ser formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca de estos hechos. La nueva ley enfatiza que no se necesita que las terceras personas que denuncien tengan representación e indica que la Defensoría del Pueblo puede intervenir. En atención a los principios rectores de la norma se precisa que no se necesita intervención de abogada/o, ni pago, ni formalidad alguna.

La obligación que se impone a las/os profesionales de salud y educación para denunciar los casos que conozcan en el desempeño de su actividad tiene su correlato en el artículo 326.2.a del nuevo Código Procesal Penal que precisa que deben formular denuncia de hechos delictuosos “los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro educativo”. La legislación previa ya disponía en la Disposición Final Tercera que “los profesionales de la salud, así como los psicólogos, educadores, profesores, tutores y demás personal de centros educativos que, en el ejercicio de sus actividades, tomen conocimiento de algún tipo de violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes deben denunciarlas ante la autoridad correspondiente, bajo las responsabilidades que señale la ley”.

El último párrafo de la ley marca el inicio del procedimiento pues señala que cuando la Policía reciba denuncia debe remitir la investigación de lo actuado en 24 horas a un Juzgado de Familia o al que cumpla sus funciones. Esta es una sustantiva diferencia con la legislación anterior por dos razones. La primera diferencia es el establecimiento de un plazo célere para la actuación policial de recojo de información preliminar, plazo que en la legislación anterior solo existía para los casos de flagrante delito en los que se indicaba que la investigación debía realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Es importante que se haya fijado un plazo corto pues, en atención a los principios que inspiran la ley, el sistema debe atender bajo el principio de la debida diligencia. La segunda diferencia es que la Policía ya no remite su actuado a un Juzgado de Paz o Fiscalía Provincial en lo Penal y a la Fiscalía de Familia, sino que lo hace directamente a un Juzgado de Familia. Con esto se ha suprimido el proceso paralelo previsto en la legislación anterior por el que los casos seguían una doble vía: una tutelar para lo que se derivaba a la Fiscalía de Familia y una sancionatoria para lo que derivaba a la Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado dependiendo de si se trataba de un delito o de una falta. Esta doble vía paralela se ha eliminado y los casos son derivados a un Juzgado de Familia o el que hace sus veces para una decisión relativa a la protección de la víctima.

Artículo 16

Proceso

En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957.

Artículo 17

Flagrancia

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos.

En estos casos, la Policía

El proceso sigue con la intervención del Juzgado de Familia, o el que hace sus veces, que se encarga de dar una primera decisión sobre el caso referida a la protección de la víctima en el plazo máximo de 72 horas, otra diferencia con la legislación anterior que tampoco disponía plazos para la actuación jurisdiccional.

El que la derivación se haga a un juzgado de familia tiene dos ventajas ligadas entre sí. La primera es que, al ser un órgano jurisdiccional el que interviene, no está en duda su posibilidad de dictar mandatos coercitivos propios de las medidas de protección; durante la vigencia de la legislación previa existió gran polémica sobre este punto pues esa facultad recaía en las fiscalías de familia. La segunda es que, por tratarse de un órgano jurisdiccional, puede pronunciarse también sobre otros aspectos conexos importantes en una situación de violencia como los mandatos de Derecho de Familia: alimentos, tenencia, régimen de visita, etc., que, en el esquema anterior, se presentaban cuando la denuncia llegaba a los juzgados de familia muchos meses después de que se interponía la denuncia inicial. La intervención jurisdiccional sigue la lógica de una tutela de urgencia ante la violación del derecho a la integridad personal, lógica similar a la que sigue el proceso de hábeas corpus.

Terminada la etapa de protección que tiene como actores a la Policía Nacional del Perú y al Juzgado de Familia, empieza la etapa orientada a la sanción por lo que el caso se deriva a la fiscalía especializada en lo penal que será la encargada profundizar la investigación y derivar el caso a un juzgado de paz letrado si los hechos constituyen faltas, o si debe presentarse acusación ante un juzgado penal si existen elementos de un delito. La etapa de sanción se sigue con las normas del Código Procesal Penal, salvo en aquellos distritos judiciales en los que este modelo no ha sido implementado, como sucede en las provincias de Lima y Callao.

Como en la legislación anterior se permite la detención inmediata y el allanamiento a la casa del agresor o el lugar de los hechos. A diferencia de la norma previa que, si bien disponía que la investigación en estos casos debía hacerse en un plazo máximo de 24 horas, pero daba un plazo máximo de 15 días para que la Policía pusiera el atestado en conocimiento de la Fiscalía provincial, la nueva ley exige que se ponga lo actuado en conocimiento a la Fiscalía penal inmediatamente y también al Juzgado de Familia para que proceda a las disposiciones sobre protección integral de la víctima.

Los supuestos de flagrancia en el marco de la ley deben articularse a la nueva regulación vigente sobre flagrancia delictiva que se aplica en los casos de i) que el imputado haya sido sorprendido en pleno acto delictivo; ii) que haya confesado la

redacta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 16, el juzgado de familia o su equivalente comunica los actuados a la fiscalía penal correspondiente.

Artículo 18 **Actuación de los** **operadores de justicia**

En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctimas.

Artículo 19 **Declaración de la** **víctima y entrevista única**

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida.

comisión del delito; o, iii) que los elementos de convicción acumulados –esto es, las pruebas generadas tras la investigación preliminar – sean evidentes⁴⁵. Esto debería incluir la detención hasta que la Fiscalía penal presente en audiencia ante el juzgado de investigación preparatoria el pedido de realización del proceso inmediato junto con las medidas de coerción que considere pertinentes⁴⁶. En paralelo se daría la actuación del Juzgado de familia conforme a lo establecido en la presente ley.

Este artículo es novedoso respecto de la ley anterior que solo señalaba acciones generales como “establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo de formalismo”. En general, solo existían medidas para evitar las declaraciones repetitivas en casos de niñas, niños y adolescentes en casos de violencia sexual⁴⁷, por lo que es saludable que, en concordancia con los principios rectores de la ley, se mencione expresamente que, respecto de todas las víctimas, debe evitarse la doble victimización que se plasma en “declaraciones reiterativas y de contenido humillante” y que deben evitarse las actitudes de discriminación contra las víctimas.

El TUO de la Ley N° 26260 no tenía una disposición parecida. Como se ha mencionado, sí estaba previsto el mandato de evitar las declaraciones repetitivas en casos de niñas, niños y adolescentes en casos de violencia sexual⁴⁸ y, para ello, la Fiscalía de la Nación aprobó la “Guía

⁴⁵ Artículo 446 del Código Procesal Penal.

⁴⁶ Artículos 447 y 448 del Código Procesal Penal.

⁴⁷ Artículo 143 del Código de Procedimientos Penales.

⁴⁸ Artículo 143 del Código de Procedimientos Penales.

La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica.

El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.

Artículo 20 Sentencia

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria.

En el primer caso el juez señala el término a las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. Las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles que hayan sido decididas en esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada.

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, y cuando corresponda, contiene:

1. La continuidad o modificación de las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente.
2. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima.
3. El tratamiento especializado al condenado.

de Procedimiento de Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual⁴⁹, guía que estipula el procedimiento en Cámara de Gesell y en Sala de Entrevista Única. La ley actual abre la posibilidad de que se aplique esta técnica también para mayores de edad.

Se complementa el mandato de no revictimización con la disposición de que a nivel jurisdiccional no se puede solicitar una nueva declaración salvo por razones precisas como aclarar, complementar o precisar algún punto, lo que debe ser interpretado de forma cerrada.

Para la valoración de las declaraciones de las víctimas debe tomarse en cuenta los mandatos del Acuerdo Plenario N° 2-2005-CJ-116 sobre requisitos de la sindicación de coacusados/as, testigos/as y agraviados/as.

El proceso puede terminar con una sentencia absolutoria, en cuyo caso cesan las medidas de protección, así como las cautelares salvo que hayan sido previstas en instancia especializada. Si se da una sentencia condenatoria, además de lo que indica el Código procesal penal cuando es aplicable se enumeran algunos contenidos de las sentencias. En su mayoría se trata de lo previsto en el TUO de la Ley N° 26260 salvo que, en lugar del establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, se hace referencia a la continuidad o modificación de las medidas cautelares que son de materias como tenencia y patria potestad. La nueva ley incluye una disposición a cargo de los gobiernos locales para las medidas de protección, lo que no queda claro es si se refiere a la intervención del Serenazgo para el cumplimiento de dichas medidas de protección (artículo 23); se dispone también la inscripción en el Registro Único de Víctimas y Agresores.

⁴⁹ Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1247-2012-MP-FN de fecha 22 de mayo de 2012.

4. La continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad, asignación de alimentos, entre otras.

5. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada.

6. La inscripción de la sentencia en el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio Público.

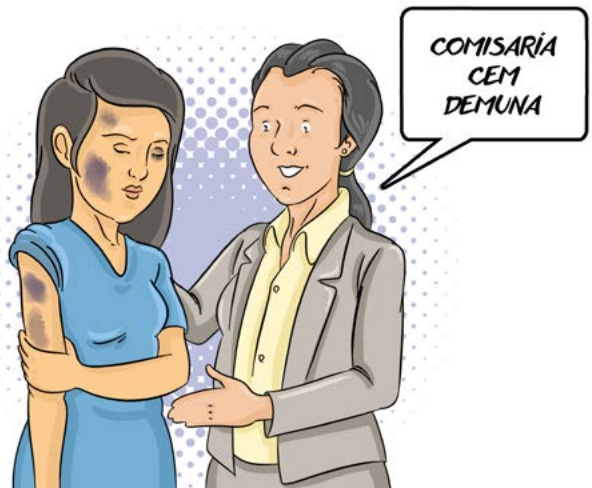
7. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas.

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua diferente al castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no sea posible la traducción, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerles en conocimiento su contenido.

Artículo 21 Responsabilidad funcional

Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 del Código Penal, según corresponda.

Respecto al acceso a la justicia se señala expresamente que se procederá a la traducción de la sentencia o su lectura en la lengua de origen para que se conozca su contenido. Esto debe darse en el marco del Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural Dirigido a Funcionarios del Sistema Estatal de Justicia⁵⁰.



Este artículo es una novedad pues establece expresamente que quienes omitan o retarden la realización de los procesos incurrir en delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 377 del Código Penal) y de denegación o deficiente apoyo policial (artículo 378 del Código Penal). La ley establece sanciones con la finalidad de tener mecanismos coercitivos para revertir las inconductas que se presentan a lo largo del sistema y que impactan en el acceso a la justicia de las víctimas.

⁵⁰ Aprobado en el 2015 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 22

Medidas de protección

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las siguientes:

1. Retiro del agresor del domicilio.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección.
5. Inventario sobre sus bienes.
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.

COMENTARIO

La lista de las medidas de protección sigue en lo esencial la que ya estaba prevista en el TUO de la Ley N° 26260. La nueva ley da mayor detalle de la prohibición de comunicación enumerando diferentes canales, los que incluyen las redes sociales, y señala que procede la prohibición del derecho de tenencia y porte armas aunque solo especifica el procedimiento para armas de uso civil que administra la SUCAMEC. Por medio de la Ley N° 30275, de noviembre de 2014, se había especificado en el TUO de la Ley N° 26260, que “en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, se oficiaría al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones respectivas”. En virtud de los principios rectores de la ley, debería procederse así porque la medida de protección es frente a todo tipo de armas. Las restricciones al uso de armas de uso civil por antecedentes y en casos de violencia están previstas en Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.

³⁰ CIDH. El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. 2011, p. 1.

Artículo 23 **Vigencia e** **implementación de** **las medidas de protección**

La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados.

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna.

Artículo 24 **Incumplimiento de** **medidas de protección**

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal.

En este artículo se menciona la extensión de las medidas de protección, las mismas que duran hasta el final del procedimiento o hasta que se desestime la denuncia.

La novedad es lo referido a la obligación expresa de la Policía Nacional del Perú de ejecutar las medidas de protección disponiendo para ello de un mapa visual que les permita ubicar a las víctimas de su jurisdicción y la habilitación de un canal de comunicación. Es también novedoso que se considere el apoyo de las fuerzas del serenazgo cuando existan.

El énfasis en una regulación estricta de las medidas de protección, con plazos fijos y acompañada del claro establecimiento de la obligación de la Policía Nacional del Perú de implementarlas efectivamente se corresponde con la responsabilidad estatal de resguardar la integridad y vida de las víctimas, concretamente, en el reconocimiento de que una medida de protección es una declaración de riesgo de estos derechos tal como establece la Comisión Interamericana⁵¹.

Esta disposición es una novedad importante de la nueva ley porque se hace explícito que aquellas personas que no cumplan con las medidas de protección incurrirán en el delito de resistencia o desobediencia previsto en el artículo 368 del Código Penal (Quien “desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años”). Esta mención expresa debe hacerse operativa para abrir proceso penal cuando sea el caso, por este delito de forma concurrente al proceso por violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

⁵⁰ Aprobado en el 2015 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo 25

Protección de las víctimas en las actuaciones de investigación

En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la presencia de aquella, salvo que la víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957.

Artículo 26

Contenido de los certificados médicos e informes

Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de salud física y mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Igual valor tienen los certificados expedidos por los centros de salud parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se

La legislación anterior, TUO de la Ley N° 26260, luego de sucesivas modificaciones, prohibía la conciliación en cualquier etapa de los procesos de violencia familiar, tanto policial, fiscal como judicial. La nueva ley retoma este punto y añade la prohibición de confrontación que sí estaba prevista aunque se precisaba que procedía cuando la víctima “fuese mayor de 14 años de edad” y en el caso que la víctima fuese menor de 14 años de edad, la confrontación con el presunto autor procederá también a solicitud de la víctima⁵².

Respecto de la reconstrucción se indica que debe realizarse sin la presencia de las víctimas, salvo a solicitud de la víctima mayor de edad. El artículo 146 del Código de Procedimientos Penales ya precisaba que “en ningún caso, se ordenará la concurrencia del niño o adolescente agraviado en casos de violencia sexual para efectos de la reconstrucción”. El Código Procesal Penal señala también que “en los delitos contra la libertad sexual no se exigirá la concurrencia de los agraviados menores de edad, o de las víctimas que pueden ser afectadas psicológicamente con su participación”. Es saludable que la ley aluda a más supuestos que los de violencia sexual.

Este artículo retoma en mucho lo previsto en el TUO de la Ley N° 26260 respecto del valor probatorio de los certificados de salud, incluyendo los médicos de los centros parroquiales, así como la gratuidad de los mismos.

Una novedad es la consideración de los establecimientos privados sin el requisito previo de convenio con el Ministerio Público y el Poder Judicial que se consideraba en la legislación anterior; la nueva ley solo menciona que se trate de establecimientos autorizados por el MINSA. Esto es especialmente relevante considerando los patrones de atención en salud de la población con seguros privados o afiliados a una empresa prestadora de salud (EPS) y que, en cualquier caso, incluyendo los de violencia, acuden a establecimientos privados de atención primaria.

Otra novedad de la nueva ley es que otorga valor probatorio a los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer (CEM) y otros servicios estatales especializados en salud mental que puedan existir, pe.j., a nivel local como el Programa Warmi Wasi de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La norma nueva señala también que los certificados que califican daño físico y psíquico deben emitirse con los parámetros del Instituto de Medicina Legal (IML). En esa línea, indica que deben consignar la calificación de días de atención facultativa, así como la calificación de días de incapacidad. Esta parte de la norma

⁵² Artículo 143 del Código de Procedimientos Penales.

encuentre autorizado por el Ministerio de Salud.

Los certificados correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la víctima deben ser acordes con los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Los certificados médicos contienen información detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se ha sometido a la víctima. De ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas deben consignar necesariamente la calificación de días de atención facultativa así como la calificación de días de incapacidad.

En el marco de las atenciones que brinden todos los establecimientos de salud públicos y privados deben resguardar la adecuada obtención, conservación y documentación de la prueba de los hechos de violencia.

Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En el sector público, la expedición de los certificados y la consulta médica que los origina, así como los exámenes o pruebas complementarios para emitir diagnósticos son gratuitos.

Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria la realización de la audiencia especial de ratificación pericial; por lo que no se requiere la presencia de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan emitido para otorgarles valor probatorio.

debe entenderse como de aplicación progresiva pues la estandarización de parámetros médicos legales no será inmediata. No obstante, una interpretación acorde a los principios rectores de la ley, debería admitir los certificados médicos a la fecha sin tales parámetros siempre que, como indica la misma ley y prescribía la norma anterior, se tenga "información detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se ha sometido a la víctima". Esto es especialmente relevante para la etapa de protección del procedimiento pues ante la Policía y los juzgados de familia es más probable que se cuente con certificados de salud física y mental que no tengan calificación médico legal pero que sí son evidencia de la violencia. Además, en esta etapa no se requiere de la calificación médico-legal pues no se determina la distinción entre faltas y delito.

La nueva ley también incluye la obligación de resguardar la prueba, lo que ha sido especialmente destacado en la jurisprudencia interamericana sobre casos de violación sexual

Es muy importante que la ley precise que no se requiere la realización de audiencia de ratificación pericial. Se trata de una disposición semejante a la existente en el artículo 2 de la Ley N° 28457, sobre pruebas de ADN en procesos de filiación extramatrimonial: citar a las psicólogas/os y médicas/os a declarar sobre los certificados y evaluaciones emitidas desincentiva que el personal de salud suscriba los documentos y no tiene mayor aporte probatorio pues, por el tiempo transcurrido después de realizadas las atenciones, el/la profesional se limita a repetir los parámetros de su informe previo.

⁵³ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, numeral 194 y Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, numeral 178.



TÍTULO III

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA,
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE
VÍCTIMAS Y REEDUCACIÓN DE
PERSONAS AGRESORAS

CAPÍTULO I PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS

Artículo 27 Servicios de promoción, prevención y recuperación de víctimas de violencia

La protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar contra actos de violencia es de interés público. El Estado es responsable de promover la prevención contra dichos actos y la recuperación de las víctimas.

Es política del Estado la creación de servicios de atención y prevención contra la violencia.

La creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra la

COMENTARIO

La legislación previa no consideraba la protección de la violencia como asunto de interés público y tampoco era enfática con la obligación estatal de prevención, atención y recuperación en estos casos por lo que es importante lo que aporta la nueva ley.

Respecto de los gobiernos subnacionales y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la norma señala la obligación de crear y gestionar tres servicios: 1) hogares de refugio temporal, 2) programas preventivos de violencia con varones y 3) servicios de protección de víctimas. Esto es una novedad en lo referido a hogares de refugio temporal pues, a diferencia de la regulación previa, se indica ahora que el MIMP debe crearlos y gestionarlos. En lo referente a los programas preventivos con varones y de protección para víctimas, se retoma lo señalado en el TUO de la Ley N° 26260, aunque en esta norma que, si bien listaba varios ejemplos de servicios,

mujer e integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es función de dicho Sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad.

Artículo 28

Valoración del riesgo de víctimas de violencia de pareja

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo para el pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada cuando las circunstancias lo ameriten.

Para el caso de otros integrantes del grupo familiar, se aplica una ficha de valoración del riesgo que permita identificar las vulnerabilidades y necesidades específicas de protección.

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los casos a través de sus comisarias, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al juzgado de familia o equivalente, conforme al proceso regulado en la presente Ley.

no mencionaba expresamente los trabajos en nuevas masculinidades que han sido desarrollados de forma piloto por el MIMP y algunos gobiernos locales.

Se señala además que es obligación del sector de promover, coordinar y articular la implementación de estos servicios.

La valoración del riesgo es otra de las novedades más importantes de la nueva ley. Como se ha mencionado, en el Sistema Interamericano se ha establecido que una medida de protección es una declaración de riesgo de los derechos a la integridad y vida de la víctima⁵⁴ por lo que se requiere generar una valoración del mismo de forma inmediata a la entrada de la persona denunciante al sistema de justicia. Por ejemplo en el ordenamiento español se hace referencia a un cuestionario de valoración inicial de riesgo por los cuerpos de seguridad⁵⁵.

La ley peruana establece que la Policía Nacional y el Ministerio Público aplican las fichas de valoración del riesgo. La Policía tiene entonces la misión de incluir la ficha en la información que remite al Juzgado de Familia dentro de las 24 horas que indica la ley para su actuación. La mención al Ministerio Público se entiende en el marco de sus competencias vigentes, p.e. la actuación en casos de niñas, niños y adolescentes conforme a los artículos 138 y 144 b del Código de Niños y Adolescentes.

A la fecha de promulgación de la nueva ley, se contaba con un modelo de ficha de valoración del riesgo en relaciones de pareja como parte del "Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo"⁵⁶.

⁵⁴ CIDH. Informe de Fondo No. 80/11. Caso 12.626, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros vs. Estados Unidos. 21 de julio de 2011, numerales 138-145.

⁵⁵ MINISTERIO DE JUSTICIA. Guía y manual de valoración integral forense de la violencia de género y doméstica. 2005. pp. 263-268.

⁵⁶ Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MIMP de octubre de 2015.

Artículo 29

Implementación y registro de hogares de refugio temporal

Es política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementa y administra el registro de hogares de refugio temporal que cumpla con los estándares de calidad en la prestación de servicio. La información de este registro es confidencial y será utilizada para los procesos de articulación, protección y asistencia técnica.

Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales e instituciones privadas que gestionen y administren hogares de refugio temporal facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueba los requisitos mínimos para crear y operar los hogares de refugio temporal, así como los estándares mínimos de calidad de prestación del servicio.

Este artículo recoge básicamente lo dispuesto por la Ley que crea hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar, Ley N° 28236, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2005-MIMDES. Destaca la afirmación expresa de que es "política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal".

El reglamento de la Ley N° 28236 señala la obligación del Ministerio de la Mujer de implementar y administrar el Registro de Hogares. La nueva ley señala que la información del registro será confidencial y sólo para uso del organismo rector para articulación, protección y asistencia técnica.

La nueva ley precisa que expresamente que los gobiernos subnacionales e instituciones que gestionen los hogares facilitarán información y acceso al MIMP para el cumplimiento de sus funciones. Destaca que a este sector le corresponde el monitoreo, seguimiento y evaluación que ya se esboza en el reglamento de la Ley N° 28236.

Por último, el artículo precisa el rol del MIMP de velar por el funcionamiento de los hogares generando lineamientos para su creación y operación con estándares de calidad. En este marco, desde junio de 2015 se cuenta con las "Normas para el Registro de Hogares de Refugio Temporal"⁵⁷ así como con los documentos denominados "Criterios de derivación a los Hogares de Refugio Temporal", "Lineamientos para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal" y "Modelo de Reglamento Interno Básico de los Hogares de Refugio Temporal"⁵⁸.

⁵⁷ Aprobadas por Resolución Ministerial N° 119-2015-MIMP.

⁵⁸ Aprobados por Resolución Ministerial N° 118-2015-MIMP.

CAPÍTULO II

REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS

Artículo 30 **Reeducación de las personas agresoras**

Es política del Estado la creación de servicios de tratamiento que contribuyan a la reeducación de personas agresoras que han cometido actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que el agresor detenga todo tipo de violencia contra estos.

Artículo 31 **Tratamiento penitenciario para la reinserción social de las personas agresoras privadas de libertad**

El Instituto Nacional Penitenciario incorpora el eje de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar dentro de los distintos programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la población penal.

El condenado a pena privativa de libertad efectiva por delitos vinculados a la violencia contra las mujeres y los

COMENTARIO

Esta es una parte novedosa de la norma porque el TUO de la Ley N° 26260 hacía solo una referencia a “promover a nivel nacional, a través de los gobiernos locales, políticas, programas y servicios de prevención, atención y rehabilitación, como [...] servicios de rehabilitación para agresores, entre otros” (artículo 3, inciso f). La ley señala que la creación de estos servicios para la reeducación de personas agresoras es política del Estado.

La norma ha diferenciado los servicios de reeducación para personas agresoras privadas de libertad de las que están en libertad. En el primer caso se establece la obligación del Instituto Nacional Penitenciario de establecer el programa, el mismo que condiciona la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, del indulto y de la conmutación de la pena.

Se trata de una innovación en el ordenamiento peruano que tiene un antecedente en el sistema penitenciario español en el que se incluye como parte de los programas de tratamiento uno de “Agresores en el ámbito familiar” y otro de “Control de la agresión sexual”. El primero “se trata de un programa terapéutico intenso y exigente destinado a aquellos internos que han protagonizado delitos de violencia de género. Se realiza en grupo y la terapia se prolonga a lo largo de un año.” El segundo “está dirigido a internos que han cometido delitos de tipo sexual contra mujeres o menores. La intervención psicoterapéutica para la recuperación del interno se prolonga durante dos años.” Además, se cuenta

⁵⁹ SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. El sistema penitenciario español. 2014. pp. 32-33.

integrantes del grupo familiar, previa evaluación, debe seguir un tratamiento de reeducación de carácter multidisciplinario y diferenciado, teniendo en cuenta los enfoques consignados en esta Ley a fin de facilitar su reinserción social. El cumplimiento del tratamiento es un requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, de indulto y de la conmutación de la pena a los que hubiere lugar, conforme al marco legal vigente, los que no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe psicológico y social que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento diferenciado.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presta asistencia técnica para el diseño del programa de reeducación.

Artículo 32

Tratamiento para las personas agresoras en medio libre

En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de la asistencia a terapias sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, utilizando los diversos

con un programa denominado "Ser Mujer" para las mujeres en los centros penitenciarios: "procura la prevención de la violencia de género así como el tratamiento de las internas que la hayan padecido y necesiten un mayor grado de intervención".

En este artículo se coloca como una cuarta obligación de los gobiernos locales la implementación de servicios de reeducación de agresores. Al considerar que la obligación se implementa en coordinación con el MIMP es previsible que se siga el modelo de los Centros de Atención Institucional (CAI), servicio de intervención con varones adultos sentenciados por violencia familiar que son remitidos por el sistema de justicia. El periodo de intervención puede ser hasta de un año como mínimo, pudiendo extenderse según criterio de los profesionales responsables de la atención que son un psicólogo, un trabajador social y dos terapeutas o facilitadores.

Un modelo semejante puede verse en la experiencia mexicana⁶⁰.

⁶⁰ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja Manual para responsables de programa. 2010.

programas que desarrollan las instituciones de protección a la familia. Esta medida puede aplicarse desde el inicio del procedimiento.

Es obligación de los gobiernos locales implementar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras.

En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena privativa de libertad efectiva.

El sometimiento a un servicio de tratamiento para la reeducación de agresores en instituciones públicas o privadas que el juzgado disponga, es considerado como regla de conducta, sin perjuicio de la sanción penal que corresponda.





*¡25 de
noviembre:
Día de la
No Violencia
contra la Mujer!*

TÍTULO IV

**SISTEMA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

Artículo 33 **Creación, finalidad** **y competencia del** **sistema**

Créase el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a fin de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, integradas y complementarias para la acción del Estado en la prevención, atención, protección y reparación de la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos de lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es un sistema funcional.

Artículo 34 **Integrantes** **del sistema**

Integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia

COMENTARIO

La Ley del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, señala que “los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno”. Se crean por ley con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros (artículo 43).

El Sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un sistema funcional, tiene por finalidad “asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado” (artículo 45).

La norma menciona como integrantes del Sistema a quienes integran la comisión multisectorial de alto nivel con instancias subnacionales. En el Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES, que aprobó el “Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015”, se señalaba que la Comisión Multisectorial Permanente de Alto Nivel encargada del seguimiento y monitoreo del Plan estaba integrada por: “a) El (la) Ministro (a) de la Mujer y

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar las entidades que integran la comisión multisectorial de alto nivel, que cuenta con una secretaría técnica, y las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 35 **Comisión Multisectorial de Alto Nivel**

Constitúyase la Comisión Multisectorial de Alto Nivel con la finalidad de dirigir el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y formular los lineamientos y la evaluación de lo establecido en la presente norma.

La Comisión está presidida por el titular o el representante de la alta dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e integrada por los titulares o los representantes de la alta dirección de las instituciones que se determinen en el reglamento de la presente Ley.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y el cumplimiento de la presente Ley.

La Dirección General contra la Violencia de Género del citado ministerio se constituye como secretaría técnica de la Comisión, la cual convoca a especialistas de diferentes sectores y representantes de la sociedad civil con la finalidad de constituir un grupo de trabajo nacional.

El reglamento de la presente Ley regula el funcionamiento de la Comisión.

Desarrollo Social quien la presidirá. b) El (la) Ministro (a) del Interior. c) El (la) Ministro (a) de Salud. d) El (la) Ministro (a) de Educación. e) El (la) Ministro (a) de Justicia. f) El (la) Ministro (a) de Relaciones Exteriores". Indicaba también que formaban parte de la Comisión, las máximas autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo en calidad de miembros supernumerarios.

En la regulación de la Comisión Multisectorial se menciona, como en el Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES, que aprobó el "Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015" (PNCVHM), que el MIMP es el ente rector en la materia y, por tanto, responsable del cumplimiento de la ley. A diferencia del Decreto Supremo, no se menciona quiénes integrarán la Comisión, deja eso para el reglamento. También es novedoso que se mencione específicamente que será la Dirección General contra la Violencia de Género del MIMP la responsable de la Secretaría técnica de la Comisión y que conformará un Grupo de Trabajo Nacional con especialistas de los diferentes sectores representantes de la sociedad civil.

Artículo 36

Funciones de la Comisión Multisectorial

Son funciones de la Comisión Multisectorial, las siguientes:

- 1.** Aprobar y difundir el protocolo base de actuación conjunta y los lineamientos para la intervención intersectorial articulada en prevención, atención, protección, sanción y reeducación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, teniendo en cuenta los informes emitidos por el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
- 2.** Hacer el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales que aborden la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, teniendo en cuenta los informes emitidos por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
- 3.** Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la dotación de recursos a los sectores comprometidos en la aplicación de la presente Ley, previa planificación presupuestaria intersectorial.
- 4.** Garantizar la adecuación orgánica y administrativa de las instancias responsables de la implementación de los lineamientos dictados por la Comisión para la mejor aplicación de la presente Ley.
- 5.** Promover la creación de observatorios regionales de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- 6.** Promover la creación de las instancias regionales, provinciales y distritales encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Como en el Decreto Supremo que aprobó el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015, se señala en la presente ley que la Comisión Multisectorial es la encargada de la coordinación con el Ministerio de la Economía y Finanzas para la dotación de los recursos correspondientes; se enumeran además funciones más generales en atención a que no se trata de una referencia a un Plan Nacional, sino a una ley que crea un Sistema Nacional.



Artículo 37 **Instancia regional de concertación**

La instancia regional de concertación tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel regional, y promover el cumplimiento de la presente norma. Su composición se determina en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 38 **Instancia provincial de concertación**

La instancia provincial de concertación tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel provincial, y promover el cumplimiento de la presente norma. Su composición se determina en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 39 **Instancia distrital de concertación**

La instancia distrital de concertación tiene como responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel distrital, y promover el cumplimiento de la presente norma. Su composición se determina en el reglamento de la presente Ley.

Las Instancias Regionales de Concertación estaban ya previstas en el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 como “mecanismos de carácter mixto y de alcance regional, integrados por representantes del Estado y de la sociedad civil, existentes en la región”. Tenían como responsabilidades elaborar un Plan Regional contra la Violencia o, en su defecto, incorporar los indicadores y resultados del PNCVHM adaptados a su región en el Plan Concertado de Desarrollo, así como sistematizar los resultados de monitoreo del referido Plan en la jurisdicción y remitir la sistematización a la Mesa de Trabajo Nacional. La ley actual deja la determinación de su composición al reglamento e indica dos responsabilidades i) “elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas” sobre la materia y ii) promover el cumplimiento de la ley.

Las instancias provinciales son una novedad respecto del sistema previsto en relación al PNCVHM 2009-2015. Su composición será determinada por reglamento y sus responsabilidades son las mismas de las instancias de concertación regional, pero a nivel de la jurisdicción provincial.

Las instancias distritales son también una novedad respecto del sistema previsto en relación al PNCVHM. Su composición será determinada por reglamento y sus responsabilidades son las mismas de las instancias de concertación regional, pero a nivel de la jurisdicción local.

Artículo 40

Instrumentos y mecanismos de articulación del sistema

Son instrumentos y mecanismos de articulación del sistema:

- a.** El Protocolo Base de Actuación Conjunta.
- b.** El Registro Único de Víctimas y Agresores.
- c.** El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
- d.** El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Artículo 41

Protocolo Base de Actuación Conjunta

El Protocolo Base de Actuación Conjunta en prevención, atención, protección, detección precoz e intervención continuada, sanción y reeducación frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar contiene los lineamientos de articulación intersectorial y los procedimientos que aseguren la actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados. Constituye un instrumento de obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad.

El Protocolo debe considerar de forma especial la situación de las mujeres que, por su condición de tal y en cruce con otras variables, estén más expuestas a sufrir violencia o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, las afrodescendientes, las que se encuentran en situación de exclusión social y las mujeres con discapacidad, entre otras. Similar consideración debe contemplar el protocolo respecto de los integrantes del grupo familiar desde el enfoque de derechos humanos, generacionales e interculturales.

La propuesta de instrumentos y mecanismos de articulación del Sistema es la misma que data del anteproyecto de ley original producto del trabajo de la Comisión Especial Revisora de la Ley N° 26260, y que se concretó en este período parlamentario en la iniciativa de ley N° 212/2011-CR, presentada por el Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria a iniciativa del Congresista Leonardo Agustín Inga Vásquez. Se compone de cuatro partes que se detallan en los artículos siguientes.

En el proyecto original se hacía mención a la rehabilitación, lo que en la ley aprobada se ha reemplazado por la “detección precoz e intervención continuada” y la “reeducación”. Tiene la finalidad de contener lineamientos de articulación intersectorial y se constituye en un instrumento de obligatorio cumplimiento. Un antecedente del mismo está en el “Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo”⁶¹, el mismo que deberá ser revisado para cubrir el ámbito más amplio de la ley.

⁶¹ Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MIMP de octubre de 2015.

Artículo 42

Registro Único de Víctimas y Agresores

Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de registro de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, denominado Registro Único de Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el responsable del registro de dichos casos, en el que se consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios.

Artículo 43

Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene por objeto monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información haciendo seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta materia. Su misión es desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El Observatorio elabora informes, estudios y propuestas para la efectividad del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

El registro deberá centralizar datos de la víctima, del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios. Si bien se menciona como un sistema intersectorial de registro de casos, es el Ministerio Público el responsable de su operación, aunque con el apoyo de la Policía, el Poder Judicial y el MIMP.

En Argentina existe un trabajo entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos de dicho país y el Consejo Nacional de las Mujeres para contar con un Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM), el cual es un sistema de información sobre casos de violencia en el ámbito nacional y en cada una de las jurisdicciones.

El Observatorio, a cargo del MIMP, permitirá monitorear y hacer seguimiento a las políticas públicas y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Es una instancia de producción de conocimientos que desarrollará información para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas. Su composición y funciones serán determinadas por el reglamento.

Tiene un referente en Argentina, país en el que existe un "Observatorio de la Violencia contra las Mujeres"⁶² que tiene como funciones, el monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres. Debe crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía, y publicar un informe anual de los estudios e investigaciones realizados. También hay un antecedente en España en que La Ley Orgánica 1/2004, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, artículo 30.1, creó el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer como un órgano colegiado interministerial encargado del asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género⁶³.

⁶² Creado por los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, de abril del 2009.

⁶³ Está adscrito a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Artículo 44

Centro de Altos Estudios

El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, bajo la dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través de un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento de los operadores en el rol que les compete en la lucha integral contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto.

El Centro de Altos Estudios tiene estrecha coordinación con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, universidades y centros de investigación para incidir en que se prioricen actividades de capacitación e investigación sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Todas las acciones que realiza y promueve el Centro de Altos Estudios deben incorporar los enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad, generacional y discapacidad que subyacen a la presente Ley.

Artículo 45

Responsabilidades sectoriales

Los sectores e instituciones involucradas, y los gobiernos regionales y locales, además de adoptar mecanismos de formación, capacitación y especialización permanente, de conformidad con sus leyes orgánicas y demás normas aplicables, son responsables de:

El Centro de Altos estudios, a cargo del MIMP, busca institucionalizar un mecanismo especializado de formación para quienes trabajan en los servicios relacionados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Los dos últimos párrafos, añadidos al proyecto de ley original, precisan que el Centro, como entidad especializada, debe mantener coordinación con los diferentes órganos existentes que dictan capacitaciones al personal del sistema de justicia y público en general, y enfatizan los enfoques que deben incorporarse en el entendimiento de la violencia.

El mandato de coordinación es especialmente relevante pues hay avances para la consideración del enfoque de género en las entidades de capacitación existentes. Por ejemplo, la Academia de la Magistratura (AMAG) aprobó en 2014 la Resolución Administrativa del Pleno del Consejo Directivo N° 03-2014-AMAG-CD que incorpora el desarrollo de "Cursos, talleres y seminarios sobre Género y Justicia" como actividad académica en la Línea de formación fundamental del Reglamento del Régimen de Estudio de la AMAG, la misma que está pendiente de implementación.

En este artículo se resumen responsabilidades de diferentes ministerios e instituciones, así como de los gobiernos subnacionales, para el cumplimiento de la norma, aunque no debe entenderse como una lista cerrada pues existen mandatos de la misma ley que no tienen correspondencia en este artículo, así como mandatos recogidos en otras normas vigentes que no han sido reiterados (pero tampoco derogados), con lo que debe considerarse más bien las partes novedosas que añaden en aplicación a los principios rectores de la ley.

Para coadyuvar a su cumplimiento sería importante que haya una correlación en su participación en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel regulada en el artículo 35 de la ley.

1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

a) Promover y coordinar las acciones de articulación multisectorial e intergubernamental.

b) Asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas para que desarrollen acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar conforme a sus competencias y funciones.

c) Promover en los niveles subnacionales de gobierno políticas, programas y proyectos de prevención, atención y tratamiento como hogares de refugio temporal, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, Centros de Atención Residencial, Centros Emergencia Mujer, Defensorías del Niño y Adolescente y servicios de tratamiento de personas agresoras, entre otros.

d) Supervisar la implementación de la política de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

e) Promover campañas de difusión sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y de difusión de los alcances de la presente Ley.

f) Promover el estudio e investigación sobre las causas de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y tomar medidas para su corrección.

g) Promover la participación activa de organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras, y del sector privado, con especial énfasis en el sector empresarial, en programas de prevención, atención y recuperación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

h) Disponer las medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención y atención de las víctimas de violencia en las zonas rurales del país y respecto de las víctimas en mayor situación de vulnerabilidad.

En este numeral se consideran algunas funciones vigentes del MIMP en su rol de ente rector en materia de derechos de las mujeres y se especifica su rol articulador en el marco de la ejecución de la ley, así como sus funciones de promoción, asistencia técnica y supervisión.

2. El Ministerio de Educación

- a)** Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política pública contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el ámbito de su competencia.
- b)** Fortalecer en todas las modalidades y niveles educativos la enseñanza de valores éticos orientados al respeto de la dignidad de la persona en el marco del derecho a vivir libre de violencia, eliminando los estereotipos que exacerban, toleran o legitiman la violencia, inferioridad o subordinación en el grupo familiar, en especial los que afectan a la mujer.
- c)** Supervisar que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y, por el contrario, se fomente la igualdad de los hombres y las mujeres.
- d)** Promover y fortalecer los programas de escuelas para padres; y de preparación para la vida y la convivencia saludable en el grupo familiar; estableciendo mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema, de los casos de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar.
- e)** Implementar en las instituciones educativas de la Educación Básica Regular (EBR) y la Educación Básica Alternativa (EBA), contenidos del Diseño Curricular Nacional (DCN) sobre el respeto del derecho a una vida libre de violencia, con metodologías activas y sistemas de evaluación que se adapten a los diversos contextos culturales, étnicos y lingüísticos.
- f)** Implementar programas de fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y permanente del profesorado en las temáticas de lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incorporando en las guías, módulos y programas de capacitación de docentes, y tópicos como tipos de violencia, socialización de género y violencia, identificación de factores de riesgo relacionados con la violencia y mecanismos de fortalecimiento de redes de apoyo para la prevención.
- g)** Difundir la problemática del acoso sexual entre el personal docente y administrativo, así como los protocolos del sector.
- h)** Incorporar en las guías dirigidas a la población escolar, contenidas sobre prevención del acoso y abuso sexual en niñas y niños.
- i)** Implementar estrategias creativas y de impacto sobre lucha contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en espacios educativos no formales como los mercados, espacios de esparcimiento, terminales de buses, salas de espera de instituciones públicas y privadas entre otras.

Respecto del Ministerio de Salud se destaca su intervención para la restitución de la salud de las víctimas con una atención de calidad, lo que se corresponde con derecho reconocido en el artículo 10 inciso c) de la ley. Es importante que se enfatice también en la capacitación del personal de salud para que brinden una adecuada atención.

3. El Ministerio de Salud

a) Promover y fortalecer programas para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, contribuyendo a lograr el bienestar y desarrollo de la persona, en condiciones de plena accesibilidad y respeto de los derechos fundamentales, de conformidad con las políticas sectoriales.

b) Garantizar atención de calidad a los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación en el Seguro Integral de Salud para la atención y recuperación integral de la salud física y mental gratuita, lo que incluye la atención, los exámenes, hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico y cualquier otra actividad necesaria para el restablecimiento de la salud.

c) Desarrollar programas de sensibilización y formación continua del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las víctimas de violencia a que se refiere la ley.

4. El Ministerio del Interior

a) Establecer, a través de sus órganos de línea, apoyo y control, las pautas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y control de las disposiciones de prevención, atención y protección contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en cumplimiento de las funciones del sector interior, con especial participación de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú como el órgano técnico especializado en la recepción de denuncias e investigación de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

b) Promover, en la Policía Nacional del Perú, la creación de la especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del

Respecto del Ministerio de Salud se destaca su intervención para la restitución de la salud de las víctimas con una atención de calidad, lo que se corresponde con derecho reconocido en el artículo 10 inciso c) de la ley. Es importante que se enfatice también en la capacitación del personal de salud para que brinden una adecuada atención.

En lo relativo al Ministerio del Interior (MININTER) destaca particularmente la creación de la especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, lo que debería ir de la mano de centralizar los servicios a nivel nacional y revertir el fraccionamiento que existe a la fecha entre las Comisarias de Familia de Lima y regiones y las dependencias comunes.

Asimismo, destaca que se retome una de las actividades del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018⁶⁴: "implementar en las comisarias un módulo de atención a las víctimas de violencia familiar y de género, con ambientes privados y personal capacitado" (Objetivo 3.1, actividad 3). El perfil del Módulo de atención es el de un servicio policial especializado disponible en todas las comisarias, con ambientes privados y personal policial capacitado, para atención de los casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Su implementación por parte del Ministerio del Interior debería ser coordinada con la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de

⁶⁴ Aprobado por Decreto Supremo 012-2013-IN

grupo familiar. La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana es el órgano especializado responsable de la organización, especialización y evaluación de desempeño.

c) Implementar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los Módulos de Atención a la Mujer Víctima de Violencia Familiar y Sexual, previstos en el Decreto Supremo 012-2013-IN como política nacional del Estado peruano.

d) Garantizar en los servicios de comisarías y áreas competentes la permanencia de personal especializado y sensibilizado.

e) Brindar atención oportuna para la implementación y cumplimiento de las medidas de protección otorgadas por el Ministerio Público a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

f) Expedir formularios tipo para facilitar las denuncias y regular los procedimientos policiales necesarios para asegurar la diligente remisión de lo actuado en las denuncias recibidas a los juzgados de familia o equivalente en el plazo establecido en la presente Ley.

g) Elaborar cartillas y otros instrumentos de difusión masiva para la atención adecuada de las víctimas de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar en las comisarías y dependencias policiales.

5. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

a) Sistematizar y difundir el ordenamiento jurídico del Estado en materia de lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

b) Brindar el servicio de defensa pública a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

c) Brindar, a través del Instituto Nacional Penitenciario, tratamiento penitenciario diferenciado para personas sentenciadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Servicios de la Dirección General Contra la Violencia de Género, órgano de línea del MIMP que, conforme al artículo 86 del Reglamento de Organización y Funciones de este sector, tiene la función de formular propuestas de lineamientos técnicos para el funcionamiento, gestión, supervisión y evaluación de los servicios públicos y privados de atención a las víctimas de la violencia de género a nivel nacional.

Importante es también que el MININTER deba regular los procedimientos de la investigación preliminar a su cargo en el marco del artículo 15 de la ley. Esto debería hacer antes inclusive de la emisión de normas reglamentaria porque es garantía de acceso a la justicia de las víctimas desde la entrada en vigencia de la norma.

Por último, destaca la mención expresa de la obligación del cumplimiento de las medidas de protección conforme al artículo 23 de la ley, aunque se menciona erróneamente que son otorgadas por el Ministerio Público. Destaca la obligación de diseño de material comunicaciones y de difusión masiva que se corresponde con el derecho a la información reconocido en el artículo 10 inciso a de la ley.

En el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destaca su función de brindar defensa pública en el marco del artículo 10 inciso b que señala que es complementaria a la que ofrece el MIMP. Debe también sistematizar y difundir a través del Sistema Peruano de Información Jurídica la normativa especializada y, a través del INPE, llevar adelante el programa para agresores privados de libertad que se menciona en el artículo 31 de la ley.

6. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

a) Priorizar, en el marco de los programas, estrategias y planes de actuación de promoción del empleo y la empleabilidad, la atención de las víctimas de violencia para su incorporación en el mercado de trabajo por cuenta ajena o a través del desarrollo de autoempleos productivos y otras formas de emprendimiento.

b) Coordinar con las instancias pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en cuanto a derechos laborales del trabajador víctima de violencia.

7. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones de los medios de comunicación establecidas en la presente Ley.

8. El Ministerio de Economía y Finanzas

Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.

9. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

a) Incorporar, en los programas adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a personas afectadas por violencia contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, siempre que se cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa vigente.

b) Poner a disposición de la sociedad información respecto a la ejecución de los programas sociales que han beneficiado a personas afectadas por violencia contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar.

Respecto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se consiga la responsabilidad de priorizar la capacitación para el trabajo y acceso al empleo de las víctimas de violencia, así como la coordinación para el cumplimiento de los derechos reconocidos en el artículo 11 de la ley a las víctimas de violencia. En ese marco, el MTPE ha emitido la Resolución Ministerial N° 052-2016-TR⁶⁵, que aprueba el "Protocolo de Actuación frente a la vulneración de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores víctimas de violencia" que tiene como objetivo orientar las acciones y procedimientos a seguir por los órganos de línea y programas del MTPE y de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) para brindar una respuesta oportuna, eficaz y eficiente a las/os trabajadoras/es.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como responsabilidad cumplir con la obligación que el artículo 46 de la ley impone a los medios de comunicación de difundir contenidos contra la violencia y destinar el 10% de su programación para que en horario de protección familiar las entidades públicas que conforman el Sistema difundan este tipo de información.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de la asignación de recursos en el marco de la ley. La norma señala que la Comisión de Alto Nivel lleva adelante las coordinaciones con este sector para la dotación de recursos para la aplicación de la ley (artículo 36.3) y el mismo MEF es parte de la Comisión Especial para la adecuación a la norma que debe elaborar los anteproyectos para la transferencia de recursos (Disposiciones Complementarias Transitorias).

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la responsabilidad de incorporar a las personas afectadas en los programas sociales en el marco del artículo 10 inciso d de la ley, pero se remarca que esto se hará en el marco de los criterios y reglas existentes.

⁶⁵ Del 10 de marzo de 2016.

10. El Ministerio de Defensa

Incorporar en los lineamientos educativos de las Fuerzas Armadas contenidos específicos contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de conformidad con los enfoques previstos en la presente Ley, así como en sus órganos académicos y organismos públicos adscritos.

11. El Ministerio de Relaciones Exteriores

Formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política de protección y asistencia de los nacionales en el exterior por casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

12. El Poder Judicial

Administrar justicia, respetando los derechos al debido proceso y la economía y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Todas las actuaciones ante el Poder Judicial en materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar son gratuitas para las víctimas.

13. El Ministerio Público

Elaborar, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, guías y protocolos para la actividad científico-forense y en los procesos judiciales, siendo responsable de su difusión a efectos de uniformar criterios de atención y valoración.

Al Ministerio de Defensa se le enfatiza la obligación de incorporar contenidos específicos sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en sus programas de capacitación académica, pero también en los de información a su personal.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores se le responsabiliza de llevar a cabo una política de asistencia a peruanas/os en el exterior en la materia de la ley. En esa medida, por ejemplo, formaba parte de la Comisión del PNCVHM 2009-2015 y en el "Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Femicidio, Tentativa de Femicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo"⁶⁶, se precisa que este sector protege, cautela y promueve los intereses de las/os nacionales en el exterior y que la asistencia se hace con cargo al "Programa de Asistencia Legal Humanitaria y Servicios Consulares". Así, las Misiones Consulares del Perú en el exterior tienen la función de coordinar acciones de protección y asistencia de las víctimas directas e indirectas, a través de las autoridades locales extranjeras y, de ser el caso, las gestiones conducentes para su repatriación.

En este artículo destaca el énfasis en la gratuidad para todas las actuaciones que se sigan ante el Poder Judicial en procesos por la presente ley; con esto deberían revisarse inclusive los costos por expedición de copias simples que se incluyen en el cuadro anual de valores de aranceles judiciales. Se recalca también que la administración de justicia debe priorizar la economía y celeridad procesal en el trámite de estos casos, lo que concuerda con los principios rectores de la ley.

En este artículo se destaca la obligación del Ministerio Público de protocolizar los criterios para la atención y valoración médico legal de las consecuencias de los actos de violencia, en correspondencia con lo señalado en el artículo 26 de la ley.

⁶⁶ Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MIMP de octubre de 2015.

14. Los gobiernos regionales y locales

a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas regionales, locales y comunitarios, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

b) Los establecidos en la presente Ley.

15. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)

a) Solicitar declaración jurada de no registrar antecedentes de violencia familiar en las solicitudes de licencia de armas.

b) Incautar las armas que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas.

c) Dejar sin efecto la licencia de posesión y uso de armas por sobreviniente registro de antecedentes de violencia familiar.

d) Remitir de forma semestral información actualizada al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, correspondiente al número de licencias canceladas y de armas incautadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 46 Obligaciones generales de los medios de comunicación

Los medios de comunicación, en la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizan, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, tienen especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

En los gobiernos subnacionales destaca su función de llevar adelante planes, políticas y programas contra la violencia. Además, la ley regula como su responsabilidad la creación y gestión de (i) hogares de refugio temporal, (ii) programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas, (iii) servicios de protección para víctimas (artículo 27) y (iv) la implementación de servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras (artículo 32).

Se precisan obligaciones de la SUCAMEC respecto de la implementación de la medida de protección de control de armas del artículo 22 de la ley.

Esto tiene su correlato con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2014-IN, que dispuso una reforma normativa a efectos de que (i) como parte de los requisitos para obtener licencia se exija una declaración jurada de no registrar antecedentes de violencia familiar; (ii) que la SUCAMEC incaute las armas que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas en el marco de las investigaciones o procesos por violencia familiar. Para ello, el órgano fiscal o jurisdiccional según sea el caso, deberá oficiar a la SUCAMEC la resolución que dispone la medida y ordena la entrega de las armas a esta institución para su internamiento; y que (iii) se deje sin efecto la licencia de posesión y uso - lo que implica la pérdida de los derechos por parte del usuario de la tenencia y uso del arma- por sobreviniente registro de antecedentes de violencia familiar. Estas disposiciones tienen su correlato en la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, cuyo reglamento está pendiente.

Esta es una de las disposiciones más novedosas de la ley y está presente desde el anteproyecto original trabajado por la Comisión Especial Revisora de la Ley N° 26260. Se considera una franja del 10% de la programación en el horario de protección familiar para que se emitan contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción, y reeducación en relación a la violencia contra las mujeres y quienes integran las familias. Es una iniciativa

Los servicios de radiodifusión públicos y privados permiten el uso de la franja educativa del 10% de su programación para que, en el horario de protección familiar, las instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar desarrollen contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 47 Intervención de los pueblos indígenas u originarios

La intervención de los pueblos indígenas u originarios en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se sujeta a lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución Política.

semejante a la franja electoral que es el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado, al que tienen acceso de manera gratuita y proporcional, los partidos políticos, movimientos de alcance regional o departamental y alianzas electorales con el objeto de que difundan sus planes de gobierno en el marco de los procesos electorales.

Se hace referencia a la intervención en el marco de la regulación constitucional que indica que “las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”. No obstante, no se desarrollan los alcances.

El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 sobre rondas campesinas y derecho penal, que interpreta los alcances del artículo 149 de la Constitución sobre la justicia comunal y sus límites, da pautas para la coordinación entre la justicia penal ordinaria y la justicia comunal. Se ha señalado que las comunidades campesinas y nativas y las rondas campesinas deberían resolver los casos de violencia hacia las mujeres y los miembros del grupo familiar garantizando la protección, valorando la gravedad de la afectación en los intereses de las quienes hayan sido víctimas de violencia y sancionando de forma proporcional a esto. Asimismo, se explicita la posibilidad de cuestionamiento de estos pronunciamientos por vulneración de derechos fundamentales (VILLANUEVA FLORES, Rocio. “Una mirada desde la perspectiva de género y desde el multiculturalismo. Tensiones constitucionales: el derecho a la diversidad cultural vs. Los derechos de las víctimas de violencia de género”⁶⁷. Esto es especialmente relevante en el marco de las prácticas consuetudinarias de impunidad en casos de violencia de género que se extienden a la justicia consuetudinaria, y también el marco de las particularidades del acceso a la justicia en zonas rurales del país.

⁶⁷ En LA ROSA CALLE, Javier y Juan Carlos RUIZ MOLLEDA. La Facultad jurisdiccional de las rondas campesinas. Comentarios al acuerdo plenario de la Corte Suprema que reconoce facultades jurisdiccionales a las rondas campesinas. Lima: Instituto de Defensa Legal, 2010, pp. 53-72)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA

Reglamentación

El reglamento de la presente Ley se expide por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa días calendario desde su entrada en vigencia. Para tal efecto, se convoca a una comisión conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

SEGUNDA

Prevalencia normativa

Las disposiciones de esta Ley prevalecen sobre otras normas generales o especiales que se les opongan. Los derechos que reconoce la presente Ley a las víctimas de violencia hacia la mujer y contra los integrantes del grupo familiar son irrenunciables.

TERCERA.

Implementación del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y del Centro de Altos Estudios

La implementación del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y del Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a que se refieren los artículos 43 y 44 de la presente Ley, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que para tal efecto disponga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Por medio de la Resolución Suprema N° 033-2016-PCM, de 11 de febrero de 2016, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar el informe que contenga la propuesta de Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El artículo 8 de la norma señala que la Comisión presenta al Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables un Informe Técnico que contenga la propuesta del Reglamento de la Ley N° 30364, incluyendo además las recomendaciones que correspondan para su adecuada aplicación. Esto debía hacer a los 90 días calendario de la vigencia de la ley, plazo previsto en la Primera Disposición Complementaria Final, el mismo que se ha cumplido en febrero de 2016 sin que se cuente con un producto publicado.

Este artículo precisa que lo contenido en esta ley prevalece sobre otras normas siempre que haya oposición. Esto debe aplicarse respecto de aquellos aspectos de otras normas generales o especiales en los que se reconozcan un menor estándar de derechos, no uno mayor. Esta es una interpretación pro homine que implica que las normas que se dan para proteger los derechos de las personas, como la Ley N° 30364, deben siempre recibir la interpretación que más favorezca a las/os beneficiarias/os.

En esta norma se precisa que dos de los mecanismos de articulación del Sistema tiene su implementación sujeta a la disponibilidad presupuestal del MIMP.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA

Procesos en trámite

Los procesos que se encuentren en trámite continuarán rigiéndose bajo las normas con que se iniciaron hasta su conclusión.

SEGUNDA

Comisión Especial

Créase la Comisión Especial para el diseño, conducción, coordinación, supervisión y evaluación del proceso de adecuación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a la presente Ley.

TERCERA

Integrantes de la Comisión Especial

La Comisión señalada en la disposición complementaria transitoria segunda está integrada por seis miembros:

- El titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o su representante, quien la presidirá.
- El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o su representante.
- El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante.
- El titular del Ministerio del Interior o su representante.
- El titular del Poder Judicial o su representante.
- El titular del Ministerio Público o su representante.

CUARTA

Atribuciones de la Comisión Especial

Las atribuciones de la Comisión Especial son las siguientes:

1. Formular las políticas y objetivos para la adecuación progresiva de la Ley.
2. Diseñar la propuesta del Plan de

Este artículo regula la aplicación ultractiva del TUO de la Ley N° 2620 para los procesos iniciados hasta el 23 de noviembre de 2015. Por proceso iniciado debería entenderse las denuncias puestas en la Policía, Fiscalía o Poder Judicial hasta el 23 de noviembre de 2015 pues, con la legislación previa, las tres instancias podían recibir denuncias. Al no haberse previsto un periodo de vacatio legis la norma entró en vigencia para los casos denunciados a partir del 24 de noviembre de 2015.

Pese a que no se incluyó una vacatio legis, la norma prevé una Comisión especial para la adecuación a la presente ley.

La Comisión especial está integrada por cuatro sectores de Estado (MIMP, MINJUS, MEF y MININTER) y dos órganos del sistema de justicia (el Poder Judicial y el Ministerio Público).

Adecuación del Sistema de Justicia al Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

3. Elaborar los anteproyectos de normas que sean necesarios para la transferencia de los recursos presupuestarios a que hubiere lugar.

4. Establecer, en coordinación con las entidades vinculadas, los programas anuales de adecuación, provisión de recursos materiales y humanos que permitan la ejecución del Plan de Adecuación del Sistema de Justicia a la Ley.

5. Concordar, supervisar y efectuar un seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes y programas de adecuación a la Ley.

6. Elaborar informes semestrales, los cuales son remitidos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.

QUINTA

Plazo

El plazo para la formulación del Plan de Adecuación del Sistema de Justicia por la Comisión es de sesenta días hábiles contados a partir de la instalación de la misma. Asimismo, el plazo para que la citada comisión culmine sus funciones es de ciento ochenta días hábiles a partir de la instalación de la misma.

La comisión fue instalada el 7 de diciembre de 2015 con la presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de este portafolio; de una Jueza Suprema en representación de la Presidencia del Poder Judicial; y del Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (MININTER). Su plazo para formular el Plan de adecuación al sistema vence a finales de abril de 2016 y debe culminar sus funciones en septiembre de 2016.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación de los artículos 45, 121-A, 121-B, 122, 377 y 378 del Código Penal

Modificanse los artículos 45, 121-A, 121-B, 122, 377 y 378 del Código Penal en los siguientes términos:

Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad.

b. Su cultura y sus costumbres.

c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad.

Artículo 121-A. Formas agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es menor de edad, de la tercera edad o persona con discapacidad

En los casos previstos en la primera parte del artículo 121, cuando la víctima sea menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o sufre discapacidad física o mental y el agente se aprovecha de dicha condición se aplica pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de doce ni mayor de quince años.

Artículo 121-B.- Formas agravadas. Lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar

En los casos previstos en la primera parte del artículo 121 se aplica pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años cuando la víctima:

1. Es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.

En la modificación de este artículo lo novedoso es el añadido “así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad”, con lo que enfatiza la necesidad de aplicar los enfoques de la ley (género, interculturalidad, derechos humanos y generacional) y valorar las diferencias que existen entre las víctimas y cómo eso impacta en su situación.

Esta reforma se distancia de la propuesta de un delito autónomo de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, pues se mantiene el esquema previo de faltas (hasta diez días de asistencia o descanso), lesiones leves (más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso) y lesiones graves (30 o más días de asistencia o descanso).

En este artículo se agravan las penas no solo para lesiones graves contra menores de edad, como era en el artículo vigente hasta la reforma de la ley, sino para las lesiones graves contra personas adultas mayores y personas con discapacidad. Se indica que cuando quien comete el delito se aprovecha de estas condiciones se suben las penas de 6 a 12 años (antes eran de 5 a 10 años). Para el supuesto agravado de muerte por la lesión la pena sube de 12 a 15 años (era de 6 a 12 años).

Esta reforma también se distancia de la propuesta de un delito autónomo de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, pues se mantiene en el esquema previo de faltas (hasta diez días de asistencia o descanso), lesiones leves (más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso) y lesiones graves (30 o más días de asistencia o descanso).

Se cambia la denominación original que era “lesiones graves por violencia familiar” para incluir tres supuestos: (i) cuando la víctima es mujer y es lesionada

- 2.** Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.
- 3.** Depende o está subordinado.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no menor de doce ni mayor de quince años.

Artículo 122. Lesiones leves

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, o nivel moderado de daño psíquico, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo 1 y el agente pudo prever ese resultado.

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si la víctima:

a. Es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o funcionario o servidor público y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas.

b. Es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o sufre de discapacidad física o mental y el agente se aprovecha de dicha condición.

c. Es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.

por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos del delito de feminicidio (Violencia familiar; Coacción, hostigamiento o acoso sexual; Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente); (ii) cuando la víctima es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente; y (iii) cuando la víctima depende o está subordinada respecto de su agresor/a.

No se aumentan las penas, sino cuando hay muerte a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, en que la pena sube de 8 a años (era de 6 a 15 años).

Esta reforma también es acorde al distanciamiento de la propuesta de un delito autónomo de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, pues se mantiene en el esquema previo de faltas (hasta diez días de asistencia o descanso), lesiones leves (más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso) y lesiones graves (30 o más días de asistencia o descanso).

Se añade en la redacción, además de la valoración del daño físico, la consideración del nivel moderado de daño psíquico que tiene una pena no menor de 2 años ni mayor de 5 años, y que antes era no mayor de 2 años y de 60 a 150 días multa. Para el caso de muerte a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever este resultado, la pena será sube de 6 a 12 años (antes era de 3 a 6 años).

En los numerales 3 al 5 se incluyen otras circunstancias agravantes, entre las que destaca la condición de víctima menor edad, persona adulta mayor o persona con discapacidad que tiene su correlato con la reforma del artículo 121-A del Código Penal, y la consideración de si (i) la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos del delito de feminicidio (Violencia familiar; Coacción, hostigamiento o acoso sexual; Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente); (ii) si es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente; y (iii) o si la víctima

d. Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.

e. Depende o está subordinada de cualquier forma al agente.

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado.

5. El juez impone la inhabilitación correspondiente a los supuestos previstos en el párrafo 3.

Artículo 377

Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales

El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa.

Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

Artículo 378

Denegación o deficiente apoyo policial

El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá, si la prestación de auxilio está referida a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar.

depende o está subordinada respecto de su agresor/a, lo que tiene correlato con la reforma al artículo 121-B. Si se produce la muerte en estas circunstancias y ese resultado pudo ser previsto la pena será de 8 a 14 años (antes era de 5 a 9 años cuando la víctima era un/a menor de edad y de 6 a 12 años cuando la lesión era por violencia familiar).

En este artículo se ha aumentado el segundo párrafo que hace mención al cumplimiento de las garantías personales o casos de violencia familiar en los que se impone una pena mayor, de 2 a 5 años. Aquí se identifica un error en la redacción de la norma por la referencia a la "violencia familiar" cuando los términos de la ley son violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es el artículo 21 de la norma el que señala que "quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos por hechos que constituyen violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar" comete este delito.

En este artículo se ha aumentado el tercer párrafo que hace mención al cumplimiento de las garantías personales o casos de violencia familiar en los que se impone la pena de 2 a 4 años. Aquí también se identifica un error en la redacción de la norma por la referencia a la "violencia familiar" cuando los términos de la ley son violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es el artículo 21 de la norma el que señala que "quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos por hechos que constituyen violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar" comete también este delito.

SEGUNDA. Incorporación de los artículos 46-E y 124-B al Código Penal

Incorpóranse los artículos 46-E y 124-B al Código Penal en los siguientes términos: “Artículo 46-E. Circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco

La pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. En este caso, la pena privativa de libertad no puede exceder los treinta y cinco años, salvo que el delito se encuentre reprimido con pena privativa de libertad indeterminada, en cuyo caso se aplica esta última.

La agravante prevista en el primer párrafo es inaplicable cuando esté establecida como tal en la ley penal.

Artículo 124-B. Determinación de la lesión psicológica

El nivel de la lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada de conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial, con la siguiente equivalencia:

- a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.
- b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
- c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico”.

TERCERA. Modificación del artículo 242 del Código Procesal Penal

Modifícase el artículo 242 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, el cual queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 242. Supuestos de prueba anticipada.-

- 1. Durante la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al Juez de la Investigación Preparatoria actuación de una

Esta norma es novedosa porque no existía una consideración del parentesco como circunstancia agravante general de todos los delitos, aunque sí estaba reconocido en ciertos delitos como el artículo 121-A del Código Penal sobre lesiones contra un/a menor de edad o el artículo 170 en el que se considera una pena agravada si para el delito de violación sexual el autor se hubiera “prevalecido [...] de una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima”.

Este artículo es otra de las novedades de la norma pues recoge una parte de un proyecto de ley especializado, el Proyecto de Ley N° 777/2011-CR, e introduce por primera vez una escala para la valoración del daño psíquico. Desde diciembre de 2011, se cuenta con una Guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional, la misma que fue aprobada con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2543-2011-MP/FN de 26 de diciembre de 2011.

En este artículo se añade el literal d) sobre declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados. No obstante, solo se han incluido ciertos delitos que son los de los artículos 153 y 153-A y los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI: Ofensas al pudor público, correspondientes al Título IV: Delitos contra la libertad, del Código Penal. El artículo 19 de la ley sobre declaración de las niñas, niños o adolescentes (y se considera también de mujeres) señala que debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y que tiene calidad de prueba pre-

prueba anticipada, en los siguientes casos:

a) Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. El interrogatorio al perito, puede incluir el debate pericial cuando éste sea procedente.

b) Careo entre las personas que han declarado, por los mismos motivos del literal anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 182.

c) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la realización del juicio.

d) Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos comprendidos en los artículos 153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la libertad personal, y en los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI: Ofensas al pudor público, correspondientes al Título IV: Delitos contra la libertad, del Código Penal.

Las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención de psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Las declaraciones y entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de los agraviados.

2. Las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia”.

CUARTA. Modificación del artículo 667 del Código Civil

Modifícase el artículo 667 del Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 295, el cual queda redactado en los términos siguientes:

constituida, por lo que en los casos concretos debe aplicarse lo más favorable a las víctimas, en aplicación del artículo 18 de la misma ley que indica que debe evitarse la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas.

En este artículo se han añadido dos incisos. la indignidad para quienes sean “sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad en un proceso de violencia familiar en agravio del causante” y para el/a progenitor/a “que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le

"Exclusión de la sucesión por indignidad"

Artículo 667.- Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

- 1.** Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.
- 2.** Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.
- 3.** Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad.
- 4.** Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.
- 5.** Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.
- 6.** Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad en un proceso de violencia familiar en agravio del causante.
- 7.** Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial".

haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas cuando haya alcanzado la mayoría de edad si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos", así como de quienes no han prestado "asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial". Aquí también hay un error en la redacción de la norma por la referencia a la "violencia familiar" cuando los términos de la ley son violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA

Derogación de los artículos 122-A y 122-B del Código Penal

Deróganse los artículos 122-A y 122-B del Código Penal.

SEGUNDA

Derogación de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar

Deróganse la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, y las demás leyes y disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de noviembre de dos mil quince.

LUIS IBERICO NÚÑEZ

Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO

Presidente del Consejo de Ministros

Como se ha mencionado, en la reforma penal se ha mantenido la distinción entre faltas, lesiones leves y lesiones graves para los casos de violencia física y psíquica. Aunque tanto en las lesiones leves como en las lesiones graves se menciona a las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres como víctimas, en las lesiones graves se les regula en dos artículos (artículos 121-A y 121-B), mientras que en las lesiones leves todo se incluye en un solo artículo (122) por lo que se deroga el 122-A y 122-B.

Este artículo precisa la derogación del TUO de la Ley N° 26260, la misma que, conforme a la primera disposición complementaria transitoria de la ley comentada, se aplica en adelante solo a los procesos en trámite, los que serían aquellos en lo que se interpuso una denuncia en la Policía, Fiscalía o Poder Judicial hasta el 23 de noviembre de 2015.

Respecto de la derogación de otras leyes y disposiciones que se opongan a la Ley N° 30364, se reitera lo comentado a propósito de la segunda disposición complementaria final: debe leerse como una derogación de aquellos aspectos en donde se reconozcan un menor estándar de derechos, no un mayor estándar. Esa es una interpretación pro homine que implica que las normas que se dan para proteger los derechos de las personas, como la Ley N° 30364, deben siempre recibir la interpretación que más favorezca a las/os beneficiarias/os.





*¡25 de
noviembre:
Día de la
No Violencia
contra la Mujer!*




MOVIMIENTO MANUELA RAMOS

Av. Juan Pablo Fernandini 1550, Pueblo Libre-Lima 21. Perú

Teléfono: 51-1-4238840

Web: www.manuela.org.pe

postmast@manuela.org.pe

 [Manuela.Peru](https://www.facebook.com/Manuela.Peru)